

Reconciliación y construcción de la paz territorial en Colombia: el caso de la comunidad nasa

Reconciliation and the territorial peacebuilding in Colombia: the case of the Nasa community

Catalina Acosta Oidor, Cristhian Uribe Mendoza, Johanna Amaya Panche, Alexander Idrobo Velazco, Felipe Aliaga Sáez y Diego Alejandro Ballén Velásquez*

Cómo citar este artículo: Catalina Acosta Oidor et al. «Reconciliación y construcción de la paz territorial: el caso de la comunidad nasa (Colombia)». *Revista CIDOB d'Afers Internacionals*, n.º 121 (abril de 2019). DOI: doi.org/10.24241/rcai.2019.121.1.91

Resumen: El presente artículo analiza la manera en que la comunidad indígena nasa de Toribío (Cauca, Colombia) ha configurado modelos mentales de reconciliación pese a haber recibido retroalimentaciones violentas del entorno a raíz del conflicto armado en Colombia. Para ello, se emplea la perspectiva teórica del institucionalismo cognitivo. La evidencia empírica se recolectó principalmente a través de entrevistas semiestructuradas y grupos focales. Los resultados sugieren que estrategias de resistencia pacífica como la creación de Sitios de Asamblea Permanente (SAP), el Plan de Vida Comunitario y la Guardia Indígena han contribuido a generar soluciones exitosas en la búsqueda de la reconciliación y de la paz en los territorios indígenas.

Palabras clave: reconciliación, paz, conflicto armado, indígenas nasa, Cauca, Colombia

Abstract: This paper analyses how the Nasa indigenous community of Toribío (Cauca, Colombia) has configured mental reconciliation models in spite of the violent feedback they received during the armed conflict in Colombia. For this analysis, the theoretical perspective of cognitive institutionalism is used. Empirical evidence was collected mainly through semi-structured interviews and focus groups. The results suggest that strategies of peaceful resistance, such as the creation of Permanent Assembly Sites, the Community Life Plan and the Indigenous Guard, have contributed to producing successful solutions in the search for reconciliation and peace in indigenous territories.

Key words: reconciliation, peace, armed conflict, indigenous Nasa people, Cauca, Colombia

* **Catalina Acosta Oidor**, docente e investigadora, Universidad Santo Tomás (Colombia) (catalinaacosta@usantotomas.edu.co); **Cristhian Uribe Mendoza**, doctorando en Ciencia Política, Universidad Nacional Autónoma de México (cristhianuribem@comunidad.unam.mx); **Johanna Amaya Panche**, doctoranda, Universidad de Essex (Reino Unido) (l.amayapanche@essex.ac.uk); **Alexander Idrobo Velazco**, docente, Universidad Santo Tomás (jhonidrobo@usantotomas.edu.co); **Felipe Aliaga Sáez**, docente, Universidad Santo Tomás (felipealiaga@usantotomas.edu.co); **Diego Alejandro Ballén Velásquez**, aspirante a Magíster, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales ([dalejobal.len@gmail.com](mailto:dalejbal.len@gmail.com)).

Este artículo forma parte del proyecto de Investigación-FODEIN: «Modelos mentales de reconciliación y construcción de paz en Colombia. Análisis comparado de los procesos de aprendizaje colectivo del pueblo nasa (Santander de Quilichao) y de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare (ATCC)» (Universidad Santo Tomás, 2017). Agradecemos la participación y apoyo en el trabajo de campo y sistematización de la información de los auxiliares de la investigación: Carlos Felipe Díaz Aguirre y Julieth Mariana Peña Espitia.

La puesta en marcha del Acuerdo de Paz (o Acuerdo Final) entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), firmado el 24 de noviembre del año 2016, generó diferentes reacciones entre la población afectada directa e indirectamente por el conflicto armado durante los últimos 55 años. Mientras algunos resaltan los beneficios de que la disputa se traslade del plano de la agresión física a la política en el escenario democrático, otros enfatizan la ausencia del castigo para la guerrilla como actor enemigo, puesto que su actividad se dio en la ilegalidad. Este mismo debate adquiere aún mayor relevancia cuando se trata de poblaciones que enfrentaron las consecuencias del conflicto armado en sus propios territorios, los cuales han sido objeto de disputa debido a sus condiciones geoestratégicas. De estos territorios provienen muchas de las personas que participaron en la guerra como parte de los grupos armados y allí, posiblemente, retornarán una vez se consolide la paz. Así, la posibilidad que ofrece lo que se denomina «fases de posconflicto» tiene que ver directamente con las oportunidades para la instauración de la paz territorial, es decir, de ciertas garantías que hagan posible la aplicación de lo acordado sin recurrir nuevamente a la violencia; para ello, se requiere de la construcción de mecanismos de participación que agenden políticas públicas y económicas para atender los elementos que han configurado los conflictos sociales.

Muchos son los aspectos involucrados en este proceso; sin embargo, un factor indispensable es el restablecimiento de las relaciones entre víctimas y victimarios, en las poblaciones donde estos últimos se hicieron con el control territorial, en tanto que ahora se reintegran como parte del mismo territorio. Los expertos reconocen este fenómeno como un proceso de *reconciliación* sobre el que no hay una definición única (Meierhenrich, 2008; Chapman, 2009; Gibson, 2009), pero sí muchas variables implicadas (reparación, respeto, arrepentimiento, perdón, diálogo, coexistencia, tolerancia, etc.). Desde una definición minimalista, la reconciliación se entiende como el restablecimiento de relaciones de confianza entre antiguos antagonistas en contextos de posconflicto o posguerra (Rettberg y Ugarriza, 2016; Firshow, 2017). La

comprensión de este proceso de reconciliación es necesaria para asegurar la transformación efectiva de la forma de resolver un conflicto que va de lo local a lo nacional.

Con este propósito, en este artículo se busca compartir el análisis de la experiencia de la comunidad nasa de Toribío (Cauca), cuya población –a pesar de vivir en uno de los territorios del país más afectados por la guerra– halló una resolución pacífica del conflicto con sus perpetradores como el medio para resistir a la violencia y a la presión de quienes se benefician de la guerra, al privilegiar la negociación, elemento base de la reconciliación. El análisis de dicha experiencia retoma los aportes de la teoría del institucionalismo cognitivo, desarrollada por Mantzavinos, North y Shariq (2004), para comprender cómo los individuos orientan sus acciones en contextos específicos. Siguiendo esta perspectiva, se puede afirmar que, en un contexto determinado por dinámicas de violencia, en el que se han configurado modelos mentales violentos en medio de la guerra, las comunidades de paz y, particularmente, la comunidad indígena nasa construyen modelos mentales compartidos a través de la puesta en marcha de estrategias pacíficas que apremian una solución a la violencia proveniente de su entorno.

A fin de estudiar el caso de la comunidad nasa, se realizó en junio de 2017 un trabajo de campo en el resguardo indígena de Toribío, debido a que el 95% de sus habitantes forma parte de dicha etnia y, además, es considerado uno de los municipios más afectados por el conflicto armado interno en el país (Tobar, 2017). El acercamiento a la realidad escogida se realizó a través de una metodología cualitativa, mediante la realización de seis grupos focales y once entrevistas semiestructuradas a informantes claves de la comunidad¹. Posterior a ello, la información recolectada fue transcrita, codificada y analizada con ayuda del software *ATLAS.ti*.

La presentación de este estudio se estructura de la siguiente forma: en primer lugar, se lleva a cabo un breve análisis del institucionalismo cognitivo como modelo teórico para comprender los procesos de reconciliación en las comunidades que han sido víctimas de la violencia; en segundo lugar, se contextualizan las experiencias y aprendizajes que ha adquirido la comunidad indígena nasa en el marco del conflicto armado interno; en tercer lugar, se aborda la resistencia indígena como respuesta a la violencia del conflicto armado; en cuarto lugar, se examinan las percepciones de los líderes de la comunidad nasa de Toribío respecto a sus posibilidades de reconciliación con los actores del conflicto armado interno; y, por último, se plantean algunas reflexiones a manera de conclusión.

1. Véase la ficha técnica del estudio en el anexo 1.

La lógica de la reconciliación desde la perspectiva del institucionalismo cognitivo

El institucionalismo cognitivo es un novedoso enfoque teórico desarrollado por Mantzavinos, North y Shariq (2004) que incorpora la dimensión cognitiva al análisis del surgimiento, cambio y consecuencias de las instituciones. Este enfoque ofrece al menos tres elementos analíticos de gran importancia para el estudio de la reconciliación: a) el proceso de aprendizaje, entendido como la compleja modificación de modelos mentales compartidos; b) el aprendizaje colectivo, como proceso clave para explicar el cambio institucional (social, político, económico y organizacional), y c) el surgimiento y vínculo entre instituciones formales e informales. Sus autores conciben la mente de los seres humanos como una estructura compleja que interpreta y clasifica las experiencias provenientes del entorno material, sociocultural y lingüístico. Estas operaciones coadyuvan a la configuración de modelos mentales que «evolucionan gradualmente durante nuestro proceso cognitivo para organizar nuestras percepciones y para mantener el rastro de nuestros recuerdos» (ibídem: 76). Así, los modelos mentales se pueden entender como estructuras cognitivas flexibles que ayudan a los seres humanos a resolver sus problemas. Las respuestas a las situaciones problemáticas se constituyen en modelos mentales capaces de predecir respuestas con base en una solución estructurada en la situación inicial y de acuerdo con la validación y retroalimentación del ambiente. Esto permite que el modelo mental se pueda rehaer, sofisticar o descartar. La construcción de modelos mentales no conduce inevitablemente a respuestas y soluciones apropiadas. Cuando la retroalimentación del entorno confirma un modelo mental, este se estabiliza de cierto modo; en sentido opuesto, la invalidación de un modelo mental por parte del ambiente impulsa al individuo a la implementación de soluciones creativas, que posteriormente se pueden configurar en nuevos modelos mentales (ibídem).

Un segundo aporte del institucionalismo cognitivo es el reconocimiento del aprendizaje colectivo como proceso que puede llevar al cambio institucional, sea este social, político, económico u organizacional. De acuerdo con Mantzavinos, North y Shariq (2004), el aprendizaje colectivo tiene dos dimensiones: una dimensión estática y una dimensión evolutiva. En la primera, los individuos de un mismo entorno sociocultural se comunican entre sí con el fin de hallar soluciones compartidas a los problemas que se presentan en su entorno, lo que da lugar a la formación de modelos mentales compartidos que permiten una interpretación común de la realidad. En la dimensión

evolutiva, el aprendizaje colectivo puede evolucionar a través del tiempo; sin embargo, esta transformación depende del tamaño del grupo y, por ende, difiere al interior de las organizaciones y en la sociedad en general. El aprendizaje colectivo se da inicialmente al interior de las organizaciones mediante el intercambio de conocimientos, mientras que, a nivel de la sociedad, «el proceso de evolución cultural implica el crecimiento y la transmisión de conocimiento en el tiempo» (ibídem: 77).

En tercer lugar, el surgimiento de instituciones formales e informales es impulsado por distintos mecanismos. Las instituciones informales se producen de manera endógena, esto es, a través de un proceso espontáneo de interacción social que se da al interior de una comunidad: «un conjunto de individuos que respeta las convenciones, obedece las reglas morales y adopta normas sociales, genera (como resultado no intencional de su acción) el surgimiento del orden social» (ibídem). Por su parte, las instituciones formales son impuestas de manera externa sobre una comunidad como producto de la evolución de las relaciones entre gobernantes. En algunos contextos, basta con las instituciones informales para establecer un orden social y no hace falta un mecanismo activado por un tercero para hacerlo cumplir; sin embargo, la complejidad de las sociedades modernas –en cuanto a tamaño y tipo de problemas a resolver– hace que las instituciones informales requieran de las formales para «regularizar las expectativas de los individuos, lograr su protección y tender hacia la consecución del bien público» (Méndez, 2015: 72).

La comunidad indígena nasa ha habitado históricamente el norte del departamento del Cauca (Colombia), una región que destaca, entre otras cosas, por su importancia geoestratégica para el tránsito de armas y cultivos ilícitos.

Con base en las anteriores consideraciones teóricas, resulta fundamental examinar los procesos de aprendizaje que las comunidades han desarrollado en su búsqueda de la paz y la forma en que se han configurado modelos mentales de reconciliación en sus territorios. Los esfuerzos de las comunidades con miras a construir un ambiente de paz presionan un cambio en los modelos mentales compartidos, que se expresa a través de nuevas actitudes, creencias, valores y emociones (Casas-Casas y Guzmán, 2010). En el caso de Colombia, durante la escalada de la violencia, las comunidades se tuvieron que adaptar a la dinámica de la guerra en sus territorios, lo cual supone la formación de determinados modelos mentales asociados al conflicto armado. En el nuevo escenario, cuando sus estrategias de construcción de paz han tenido éxito, las comunidades deben reconstruir su tejido social y restablecer relaciones con distintos actores del conflicto que en el pasado fueron sus victimarios: desmovilizados, fuerza pública,

etc. Esto involucra la formación de modelos mentales de reconciliación que, siguiendo la propuesta multidimensional de Méndez (2015), se pueden analizar en tres niveles: individual, intergrupales e institucional.

El nivel individual es el punto de partida del proceso de aprendizaje, puesto que es a este nivel donde se moldean las percepciones, actitudes, creencias y comportamientos de las personas a partir de sus experiencias vitales. Aquí se ponen a prueba diferentes soluciones para resolver los problemas de las comunidades que han sido afectadas por la guerra, esto es, estrategias de construcción de paz que pueden dar lugar a modelos mentales de reconciliación. En el nivel intergrupales se materializa el aprendizaje colectivo, que es producto de la interacción entre personas, familias, comunidades u organizaciones que tienen una interpretación común de la realidad y buscan soluciones compartidas a las problemáticas identificadas en su territorio. Como resultado, se configuran modelos mentales compartidos. Finalmente, en el nivel institucional, se analiza el surgimiento, propiedades o transformación de las instituciones formales e informales en el proceso de construcción de paz territorial. También resulta fundamental incorporar en el análisis las estrategias llevadas a cabo para reconstruir los lazos de confianza entre ciudadanos, comunidades y Estado, los cuales pudieron haberse deteriorado con la dinámica de la guerra y la búsqueda de soluciones a esta (ibídem).

Experiencias y aprendizajes de la comunidad nasa

La comunidad indígena nasa ha habitado históricamente el norte del departamento del Cauca (Colombia), una región que destaca, entre otras cosas, por su importancia geoestratégica para el tránsito de armas y cultivos ilícitos; razón por la cual, distintos actores armados legales (como el Ejército y la policía nacionales) e ilegales (por ejemplo, grupos guerrilleros, paramilitares y bandas criminales) han hecho presencia en la zona y se han enfrentado por el control de la misma, recurriendo constantemente a la violencia de manera desproporcionada, principalmente, a partir de la década de 1980 (CRIC, 2007; CNMH, 2012; Gamba, 2017; Luna, 2010). Como resultado de esta disputa territorial, los nasa, entre otras comunidades indígenas de la región, han tenido que vivir en carne propia las consecuencias de la guerra: desplazamientos forzados, ataques a la infraestructura, secuestros masivos, asesinatos selectivos y masacres, entre las que cabe destacar la masacre del Naya, en abril de 2001, una de las más atroces de las que tuvieron lugar durante la actividad paramilitar.

Figura 1. Noticias de la masacre del naya

Masacre de ‘paras’ en Cauca: 32 m

POPAYÁN
Por lo menos 32 campesinos fueron asesinados por paramilitares en Alto Naya, corregimiento de Buenos Aires, Cauca.

La masacre, que fue confirmada por el Defensor del Pueblo, Eduardo Cifuentes, quien viajó a la zona de la masacre, al parecer se comenzó a ejecutar desde el martes pasado, cuando incursionó en el norte de ese departamento un escuadrón de las autodefensas compuesto por no menos de 500 hombres.

Al contarse el múltiple crimen, Cifuentes dijo que la población civil es la que más sufre las consecuencias de

largo del camino”, agregó el Defensor, quien indicó que se trata de los tratados humanitarios por parte de los grupos armados al margen de la ley.

Cifuentes formuló un llamado urgente al Gobierno Nacional para que envíe refuerzos militares a la zona de los combates, para proteger a los campesinos.

Javier Meléndez, de la oficina regional de la Defensoría del Pueblo en Popayán, indicó a El Espectador que la mayoría de las víctimas fueron degolladas.

Añadió que las veredas en donde se cometieron los crímenes son El Corral, La Silvia,

Las víctimas fueron asesinadas como Apomá, Esteban Casos, Ello, Cayetano Suárez, Flor Suárez, Fred Elian Anacoqui y otros hijos.

José Antonio Cabrera, Gui Edoardo Cordero Gómez, As José Muriel M

to, Antonio J. Quintana y también figuran) N., de 17 años gu, Aleida Tulliquin, Marygar Daquines

Gobernadores de Valle y Cauca reclaman control militar

Piden presencia del Estado en el Naya

“El Estado tiene que hacer presencia en el Naya, a través de acciones concretas que permitan el desarrollo de la región”.

De esta manera, el mandatario de Cauca, Flor Alberto Tumbulá, responsable al Gobierno central de la coordinación

Floro Tumbulá aseguró que a los 4.700 desplazados que en diciembre pasado regresaron al Naya no se les garantizó su supervivencia en la zona.

Fuente: *El Espectador* (15.04.2001). *El País* (18.04.2001).

La violencia ocasionada por el conflicto armado interno constituye buena parte del repertorio de experiencias provenientes del entorno material y social de los indígenas nasa, y la mayoría de ellos se considera víctima de las dinámicas de la guerra. En el nivel de análisis individual, los relatos de las personas entrevistadas permiten vislumbrar que el conflicto armado es una de las situaciones problemáticas que más ha impactado sus vidas y su territorio ancestral.

«Nosotros aquí, como toribianos, tuvimos más de 700 ataques guerrilleros, hostigamientos. El mayor problema es la descomposición de la familia porque los hijos eran reclutados por la guerrilla o por otros grupos armados. La parte psicológica. Dentro de eso está la descomposición de la familia. También toda la parte del ataque a la naturaleza como lo son los sitios sagrados, el temor que la comunidad tiene aún referente a poder ir uno caminando y encontrarse una bomba, una granada por ahí enterrada. Ese es el temor que hay acá» (entrevista, mujer, 63 años, coordinadora general de Salud).

«Nosotros ya teníamos el horario de los hostigamientos, y los días también. A veces los días martes y los jueves siempre había hostigamientos o se escuchaba de personas heridas (...) A veces nos avisaban: “tengan cuidado porque hay gente extraña”, nos decían: “no salgan al pueblo”. Entonces uno analizaba la situación y caminaba pa’ arriba [a su casa]» (entrevista, mujer, 30 años, coordinadora pedagógica del Plan de Vida²).

2. El Plan de Vida se describe más adelante.

«Lo que hacen es que ellos se peleen y que uno sea el que pague los platos rotos (...) yo perdí a mi padre por medio de esa violencia, de una balacera que hubo, decían que él era un guerrillero, le pegaron cuatro tiros en el pecho. Desde niño he sido afectado por la violencia, por el hostigamiento, a veces los helicópteros, los aviones que nos bombardean. Uno se afecta mucho desde niño. (...) También se siente con la naturaleza porque se va desarmonizando (...)» (grupo focal, hombre, 25 años, dinamizador del Programa de Cero a Siempre en el Proyecto nasa³).

A partir de estos extractos, se observa que las experiencias vitales derivadas del conflicto armado han modelado algunas de las percepciones, actitudes, creencias

Las experiencias vitales derivadas del conflicto armado han modelado algunas de las percepciones, actitudes, creencias y comportamientos de los indígenas nasa, quienes –como primera medida– decidieron tomar distancia de los diferentes actores en disputa, incluyendo a las Fuerzas Militares y al Estado.

y comportamientos de los indígenas nasa, quienes –como primera medida– decidieron tomar distancia de los diferentes actores en disputa, incluyendo a las Fuerzas Militares y al Estado. Este distanciamiento se puede considerar como una de las soluciones creativas que los comuneros pusieron en práctica para protegerse de las acciones bélicas; sin embargo,

esta solución no siempre tuvo los efectos esperados debido a la intensidad de la violencia en ciertos momentos de la historia del país, particularmente, durante el mandato del expresidente Álvaro Uribe Vélez:

«La guerra más intensa fue con Álvaro Uribe. Se posesionó y declaró la guerra y entonces todo el mundo, todo lo que le parezca guerrilla, son terroristas; tienen que ser combatidos o apresados (...) y entonces la guerrilla también toma la misma posición de decir: todos los que estén involucrados o hablen con la fuerza pública, tienen alguna relación, son objetivos militares. Entonces allí se empiezan a matar uno al otro» (grupo focal, hombre, 38 años, Centro de Educación, Capacitación e Investigación para el Desarrollo Integral de la Comunidad [CECIDIC]).

3. El Plan de Cero a Siempre es una estrategia nacional de atención a la primera infancia –establecida como política de Estado durante el Gobierno de Juan Manuel Santos Calderón (2010-2018)– que busca garantizar derechos de la niñez (entre 0 y 6 años de edad).

«Nosotros acá, la comunidad indígena, nunca aceptamos o nunca hemos querido por ejemplo a la Policía, el Ejército, la guerrilla, ningún grupo armado es bienvenido» (entrevista, mujer, 30 años, coordinadora pedagógica del Plan de Vida).

«El Ejército, dentro de las familias, ha violentado mucho las casas, ha habido violaciones, también chantajes, y eso se ha quedado ahí porque muchos de nosotros no denunciarnos» (entrevista, mujer, 63 años, coordinadora general de Salud).

Estas percepciones se deben al señalamiento oficial de la población como auxiliadora o red de apoyo de las guerrillas (Villa y Houghton, 2005); razón por la cual se evidencia un esfuerzo por desmarcarse de la influencia de las mismas, recalando la distancia y neutralidad frente a su presencia en el territorio. De acuerdo con Villa y Houghton (*ibídem*), mientras a la guerrilla se la percibe como un «estorbo con el que hay que convivir», puesto que exigen una colaboración logística y pretenden imponer un proyecto político que se opone a la autonomía del gobierno indígena; a las fuerzas militares se las percibe como una amenaza directa debido a que los indígenas se consideraban víctimas de la política de «seguridad democrática»⁴.

Siguiendo la propuesta de Mantzavinos, North y Shariq (2004), se trata entonces de un entorno material y social en el que se ubica a la comunidad indígena en medio del conflicto armado entre los actores enfrentados. Esta situación, marcada por un contexto violento, configura las percepciones de esta comunidad y ello genera respuestas diversas como, por ejemplo, el involucramiento de algunos de sus miembros en la guerra. Por otra parte, en el seno de la mayor parte de la comunidad, se observa cierta desconfianza hacia las fuerzas armadas institucionales; pero también destaca el rechazo a la presencia de la guerrilla, por la cual se sienten instrumentalizados y les coloca, también, en una situación de vulnerabilidad. En general, estos comportamientos –reflejo de las percepciones generadas por el entorno material– podrían considerarse respuestas inapropiadas porque posibilitan la perpetuación del contexto violento, pero dependen de la

4. La política de «seguridad democrática» se desarrolló durante el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Se trata de una política específica de defensa –denominada de esa manera por su promotor– que se centró en combatir a las guerrillas por la vía armada, lo que implicó una fuerte inversión en fuerza, armas y tecnología militares. Además, generó una política de incentivos económicos a miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía, a cambio de muertes o bajas de guerrilleros, que derivó en un fenómeno conocido como los «falsos positivos», muertes a civiles que se mostraban como guerrilleros muertos en combate.

retroalimentación del mismo contexto que los convierte en víctimas de las confrontaciones.

En la actualidad, esta percepción frente a la institucionalidad se mantiene, ya que el Estado, a pesar del desescalamiento del conflicto armado tras la desmovilización de la guerrilla de las FARC-EP, no ha hecho acto de presencia como garante de la protección de los derechos de la comunidad indígena. Por el contrario, la negligencia de su actuación en términos de presencia institucional ha facilitado el copiamiento del territorio por nuevos actores, lo cual constituye un obstáculo para la reconciliación y la construcción de paz. Asimismo, el escenario posconflicto ha conllevado la emergencia de nuevas problemáticas, como el consumo de drogas por parte de la población juvenil, un hecho que era menos frecuente anteriormente. En buena medida, ello era debido a que la presencia de los actores armados tenía una incidencia sobre el control de este tipo de comportamientos –promoviendo el cultivo, pero no el consumo–. No obstante, la preocupación por esta problemática no puede leerse como el extrañamiento de las guerrillas o como la demanda de más uso de fuerza en el territorio, sino como la necesidad de buscar soluciones novedosas para los desafíos que conlleva el cambio social, lo que implica, para el caso de Toribío, las siguientes medidas: una mayor presencia del Estado y una política efectiva de sustitución de cultivos ilícitos; es decir, un respaldo y compromiso institucionales requeridos como garantía para la efectividad de la construcción de un nuevo contexto pacífico (Rettberg, 2003).

«El día lunes, que tuvimos esa reunión de padres de familia en el colegio, discutimos que hay niños que están drogándose. Entonces nosotros decíamos: el Gobierno buscó una estrategia de supuestamente la paz y todo eso, bueno, sí. Ahoritica, como le digo, ya podemos movernos tranquilos, pero ¿qué pasa ahoritica entre nosotros mismos? Los indígenas ya tenemos esas dificultades dentro de la comunidad. El Gobierno buscó ese lado como de que ya no va a haber más guerra, pero dejemos que los indígenas vivan *paliando* [sic] entre ellos mismos y eso es lo que está pasando. Ya hay esa dificultad por la marihuana. Si usted observa acá hay muchos cultivos ilícitos y vienen los problemas» (entrevista, mujer, 30 años, coordinadora pedagógica del Plan de Vida).

«Sí ha habido un cambio porque yo era de las personas que a las 5 de la mañana estaba sintiendo los tiros por allá, uno ya se había acostumbrado a eso y uno decía: “no, pues si van a hostigar yo no me levanto a hacer nada”, y me quedaba hasta las 7 de la mañana en la cama y no me paraba. Ya cuando pasaba la balacera es cuando uno se levantaba a hacer algo, a mandar los niños a la escuela» (grupo focal, mujer, 55 años, comunidad nasa).

«Ahoritica ya salió otro grupo que es el EPL [Ejército Popular de Liberación]⁵. Ya hace como dos meses tuvimos una asamblea grande en el sesteadero porque precisamente ya estaban reclutando a niños jóvenes del colegio» (entrevista, mujer, 30 años, coordinadora pedagógica del Plan de Vida).

Como se puede observar, se configura una serie de respuestas que resultan de la interacción entre los distintos miembros de la comunidad, como resultado de dicho contexto violento. Dichas respuestas insisten en la neutralidad frente al conflicto armado a través de la resistencia, y podrían considerarse producto del aprendizaje colectivo que propende a encontrar soluciones compartidas a los problemas de la comunidad.

La resistencia indígena como respuesta a la violencia del conflicto armado

La comunidad indígena nasa se caracteriza por ejercer resistencia activa frente a las acciones violentas de actores armados que llegaron a la región para imponer sus agendas políticas e intereses económicos⁶. Dicha resistencia no implica necesariamente la confrontación violenta, sino que, por el contrario, se puede concebir como una experiencia comunitaria de construcción de paz territorial, llevada a cabo bajo el principio de neutralidad frente a los enfrentamientos entre los distintos actores armados, a partir de lo cual se organizaron y consiguieron apartarlos pacíficamente de su territorio y consolidar así su autonomía. En ese

-
5. El EPL o Ejército Popular de Liberación es una vieja guerrilla que se desmovilizó en 1991, aunque no es posible afirmar si se trata de algún reducto o grupo asociado a esta vieja organización.
 6. Ejemplo de ello fue la conformación de autodefensas indígenas, de las cuales importantes sectores derivaron en una organización armada conocida como el Movimiento Armado Quintín Lame, en un contexto caracterizado por la violencia política a manos de los terratenientes, los pájaros –germen del paramilitarismo posterior–, las Fuerzas Armadas y las confrontaciones con las guerrillas. Aunque la población indígena sirvió de base de apoyo a esta guerrilla, la adaptación de la misma a las lógicas del conflicto armado –más allá de los objetivos iniciales relacionados con obligar a las otras guerrillas a respetar la autonomía de los pueblos indígenas e impedir la incursión paramilitar– terminó por distanciarlos y conllevó la exigencia por parte de la comunidad indígena, al igual que a las otras guerrillas, de su salida del territorio. Esta posición, encabezada por el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), se hace manifiesta en el «Acta de Andalucía» y la «Resolución de Vitoncó» de febrero de 1985 (Levalle, 2018; Hernández, 2006).

sentido, cabe destacar la influencia de un factor institucional clave como fue el de la Constitución Política de 1991, que proporcionó el marco jurídico para respaldar la autonomía desde la identidad étnica en los territorios con presencia indígena. Sin embargo, fue la disputa por el poder local –militar y político– por parte de actores ilegales a finales de los años noventa, motivada por la expansión de los cultivos de coca y amapola y su procesamiento, lo que catalizó la acción colectiva por parte de los indígenas (Guzmán y Rodríguez, 2015)⁷.

Así, desde la óptica del institucionalismo cognitivo, podría afirmarse que la transformación de las respuestas de la población se produjo por la conjunción de elementos de contexto y, en su interior, por una interacción negativa con los actores armados que se intensificó y comenzó a atentar contra las creencias que le dan sentido a su organización como comunidad indígena, específicamente, respecto a su ideal de autonomía política y organizativa dentro de los territorios donde residen. Las respuestas emergentes, producto de modelos mentales que empezaban a configurarse, se caracterizaron por el énfasis en el distanciamiento generalizado de los actores armados y su papel activo para impedir su incursión en los asuntos de la comunidad como, por ejemplo, en la aplicación de la justicia. Parte del proceso de consolidación de este nuevo modelo mental, que enfatiza la construcción de justicia comunitaria desde los pueblos indígenas, fue la Resolución de Autonomía de Jambaló del 23 de marzo de 1999, en la que colectivamente se formalizó un proceso de resistencia contra la dinámica violenta derivada de la confrontación entre actores armados, no solo porque experimentaban los efectos de la guerra, sino porque se consideraba que este fenómeno era ajeno a su cosmovisión (Gamba, 2017).

De esta manera, en el nivel intergrupal, se destaca el papel de la Guardia Indígena que, pese a haber estado presente en las múltiples luchas de las comunidades indígenas desde mediados del siglo xx, se ratificó como instrumento de resistencia pacífica y control territorial a partir del año 2001 (Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, 2018). Dicho organismo es definido por los comuneros entrevistados como un instrumento de resistencia, unidad y autonomía en defensa del territorio y del Plan de Vida de las comunidades indígenas. La guardia está inte-

7. A este respecto, un hecho que puede tomarse como ejemplo, señalado por Guzmán y Rodríguez (2015: 177), es el asesinato del primer alcalde indígena de Jambaló en 1996 a manos de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN), acusado por algunos comuneros de haber apoyado con dinero la conformación de grupos paramilitares. Este evento conllevó la movilización y bloqueo de la vía panamericana por parte de 6.000 indígenas de cinco cabildos del Norte del Cauca. Su protesta se enfocó en reclamar el derecho a la aplicación de la justicia propia, lo que derivó en la «Jurisdicción Especial Indígena».

grada por niños, mujeres y hombres, y más que una estructura policial, se concibe como un mecanismo de resistencia civil que protege y difunde su cultura ancestral ejerciendo el derecho propio. Esta ha sido la estrategia más exitosa para confrontar los embates de la guerra. Hoy en día, son ellos quienes interlocutan con los distintos actores del conflicto que vulneran los derechos o la autonomía de los pueblos indígenas. Adicionalmente, la Guardia Indígena posibilita la «cohesión de los jóvenes que encuentran en ella elementos de prestigio y mecanismos de formación política y académica» (Villa y Houghton, 2005: 108).

En este sentido, debido a que la vinculación con los actores armados no se da solamente por cuenta del reclutamiento forzado, sino que en ocasiones voluntariamente los jóvenes optan por esta opción porque ven en dicha articulación la posibilidad de movilidad social –además de la atracción que ejercen sobre ellos el uniforme, las armas y la pertenencia a una agrupación que ejerce poder sobre la población–, podría decirse que la Guardia Indígena, al promover la vinculación de miembros de la comunidad en sus actividades, contribuye a evitar que los actores armados recluten a los integrantes de la comunidad y, además, haciéndolo a través de formas de gestión no violenta de los conflictos⁸.

«Guardia es ser pacífico, sin arma, con un bastón defendemos nuestros derechos, nuestra vida, nuestro territorio (...) Hemos ido a rescatar secuestrados (...) Nosotros sin un arma pasamos donde está el armado, pasamos en medio de los soldados, pasamos en medio de policías. Nosotros no tenemos miedo porque no tenemos armas. (...) un bastón tiene más fuerza porque es de la misma naturaleza (...) La guardia nunca está para maltratar a la gente, está para defender la vida y está para defender el territorio. Esa es la función de la guardia» (entrevista, mujer, 67 años, integrante de la Guardia Indígena).

«Nosotros manejamos la cuestión de que todos somos guardias. ¿Cuál es el rol de la Guardia Indígena? Controlar que no haya desarmonías dentro del territorio (...) Por ejemplo, cuando acá nuevamente llegaron los grupos

8. Aunque a partir del relato de los entrevistados se evidencia un respaldo al papel jugado por la Guardia Indígena como institución de control y protección de la comunidad, caracterizada por la neutralidad frente a los actores armados, en la aplicación de la justicia también se les acusa de terminar beneficiando a una de las partes. Así, por ejemplo, en comunicados presuntamente elaborados por disidencias de las FARC-EP, se afirma que algunos miembros de la Guardia Indígena capturaban guerrilleros a cambio de bonificaciones otorgadas por el Estado. Lo mismo ocurre desde la perspectiva de las Fuerzas Armadas del Estado, que ven en la justicia propia ejercida por la guardia una forma de proteger de la justicia ordinaria a quienes son considerados guerrilleros o delincuentes.

armados, los que se están escapando de las zonas de concentración y están conformando nuevamente, que llegaron acá cómo EPL [Ejército Popular de Liberación], entonces la guardia está pendiente de eso, para darle a conocer a la comunidad lo que está pasando» (entrevista, hombre, 29 años, miembro de la comunidad nasa).

Otra estrategia llevada a cabo en el resguardo indígena para solucionar los problemas de violencia en el territorio fue la creación de los Sitios de Asamblea Permanente (SAP) en la década de 1990. Estos son espacios físicos dentro del municipio en los que se reúne toda la población cada vez que hay alguna acción violenta por parte de los grupos armados que circulan en el territorio. Allí no solamente se refugian de los bombardeos sino que también buscan soluciones de manera conjunta. Por ejemplo, en diversas ocasiones han llevado a cabo juicios políticos a miembros de la guerrilla o del Ejército que han atentado en contra de algún comunero. En este mismo sentido se conformó el Tribunal de Justicia Indígena⁹ para juzgar a quienes afecten la autonomía del territorio. Aunado a estas estrategias que evidencian un proceso de institucionalización de la autonomía, la resistencia y la acción no violenta, se realizaron numerosas marchas, entre ellas la Gran Minga por la Vida y contra la Violencia en mayo de 2001, en la que los participantes marcharon por la vía panamericana hasta la ciudad de Cali. Las demandas se concentraban alrededor de aspectos como el rechazo a la barbarie producida por el conflicto armado y a las políticas que promovían las acciones de guerra para solucionarlo; así como en la denuncia del avasallamiento de las multinacionales en sus territorios, que buscaban expropiar a indígenas, negros y campesinos para ampliar los circuitos de la economía de libre mercado (Hernández, 2003: 112-113).

Durante la primera década de los años 2000, la actividad del movimiento indígena se dio de manera progresiva, pese a que la situación se recrudeció en términos de la violencia derivada del conflicto armado, afianzado por las políticas de «seguridad democrática» de los gobiernos de Álvaro Uribe de los períodos 2002-2006 y 2006-2010; además, durante dichos períodos se señaló oficialmente que la movilización indígena se encontraba infiltrada por la guerrilla, lo que derivó en una deslegitimación de la protesta. Algunas de las acciones más relevantes fueron el Congreso Itinerante Indígena contra la Violencia en 2004 (40.000 manifestantes) y la Minga Nacional de Resistencia Comunitaria y Social en 2008 (60.000 manifestantes) (Archila y González, 2010; Gamba, 2017).

9. Resultado del reconocimiento de la autonomía de los pueblos indígenas en materia de justicia, a través de la Constitución de 1991 y, especialmente, de la Ley 270 de 1993, artículo 12.

Es importante destacar, en este contexto, el papel que tuvo el proyecto Plan de Vida nasa como una estrategia, no solo de construcción de paz, sino también de defensa de sus usos, creencias y costumbres ancestrales. A grandes rasgos, el proyecto se plantea como propósito central la unidad comunitaria con miras a fortalecer los procesos organizativos y la cohesión social a través de la educación, la formación y los proyectos productivos (Asociación de Cabildos Indígenas de Toribío, Tacueyó y San Francisco, 2010). Para lograr estos objetivos se planteó un método basado en tres elementos fundamentales: 1) concientización a través de la educación y la capacitación; 2) participación comunitaria a través de la organización de la comunidad, y 3) desarrollo integral con programas y proyectos que abarcan la totalidad de la vida de los seres humanos y de la madre tierra. Adicionalmente, los indígenas nasa han empleado otras estrategias para transmitir sus aprendizajes de generación en generación. Para ello emplean las *tulpas*, en donde los comuneros mayores comparten con los más jóvenes sus valores, costumbres y experiencias de resistencia:

A grandes rasgos, el proyecto Plan de Vida se plantea como propósito central la unidad comunitaria con miras a fortalecer los procesos organizativos y la cohesión social a través de la educación, la formación y los proyectos productivos.

«Mire nosotros tenemos un punto esencial que le llamamos la *tulpa*. La tulpa es un lugar donde nos sentamos con los mayores, con los niños, con los jóvenes, a conversar, y ese conversar nos permite transmitir los valores culturales a los niños. El otro valor cultural para el nasa es la *minga*, que es uno de los momentos donde le digo participan todos, niños, jóvenes, adultos, ahora ya llamadas las asambleas o congresos. Entonces estos son los momentos donde uno trasmite lo ancestral. (...) La *minga* es un momento de compartir, se trabaja pero también se ríe, se goza» (entrevista, hombre, 29 años, dinamizador de la Casa de la Cultura).

En síntesis, las acciones individuales y colectivas de los nasa están orientadas hacia la resistencia simbólica y no violenta. La resistencia pacífica es una respuesta de las mismas configuraciones del contexto que, justamente por el nivel de recrudecimiento del conflicto entre actores armados, incluido el Estado, lleva a la transformación de las percepciones y acciones de los indígenas en un nivel individual, pero también en un nivel intergrupal, en el que se evidencia que los comportamientos derivan de un sentir colectivo y de una interpretación común de los problemas. Así, las acciones tales como la participación en la Guardia Indígena, las *mingas*, las asambleas permanentes, los tribunales de justicia o las movilizaciones son prácticas pacíficas colectivas de resolución de conflictos, que pueden ser consideradas como resultado de nuevos modelos mentales produci-

dos por la interacción con el entorno en constante cambio. Este nuevo modelo mental incidiría en la generación de un nuevo contexto en el que primen las relaciones pacíficas; sin embargo, las posibilidades de lograrlo implican elementos que van más allá de las comunidades indígenas como actores protagónicos; pese a ello, se debe resaltar la institucionalización de estos procesos comunitarios como esfuerzos de las comunidades por construir un ambiente de paz.

Posibilidades y obstáculos para la reconciliación según las percepciones de los líderes indígenas

A pesar de que los procesos de resistencia de los indígenas nasa de Toribío estén orientados por el principio de acción no violenta, es necesario conocer las percepciones acerca de quienes antaño fueron los responsables de sus principales problemas a nivel territorial, con quienes posiblemente deban convivir en el escenario posterior a la desmovilización de la guerrilla de las FARC-EP. Pero, además, dado que las garantías de la efectividad del Acuerdo de Paz dependen de la presencia del Estado, no solo a través de su aparato de coerción, sino principalmente de la institucionalidad en términos de autoridades civiles, infraestructura y equipamientos en general, se requiere de la generación de confianza entre la población con respecto al Estado. Todo ello implica conocer qué es lo que los indígenas conciben cuando se refieren a la reconciliación.

En sus relatos se puede advertir que la comunidad nasa entiende la reconciliación como el respeto a su territorio, a su cosmovisión y a sus reglas comunitarias. Por ejemplo, cuando un comunero se va a la guerrilla y luego deserta para regresar a la comunidad, las autoridades tradicionales llevan a cabo un proceso de armonización, es decir, dialogan con la persona, le dan remedios espirituales y lo reciben en la comunidad con la condición de que no haga nada que pueda atentar contra la armonía del Cabildo.

«Creo que sería muy de la mano con las autoridades del Cabildo, las entidades que están dentro del territorio. Ellos son los que –como organización– tienen que decir: “bueno, ustedes se van a volver a reintegrar, volver al territorio, ustedes ya conocen las condiciones, listo, cómo vienen ustedes, nos van diciendo así clarito cómo nos van a fortalecer o cómo nos van a seguir *paliando* [sic] ahora sin armas, o sea, en la política y toda esa

cuestión”. Entonces, ahí uno mira, y ahí es donde nosotros nos tenemos que preparar para escucharlos, para entablar con ellos una conversación y mirar qué es lo que hay que hacer o cómo lo vamos a hacer. (...) hay que escucharlos, hay que debatir con ellos y hay que mirar cómo es que vamos a trabajar. Tampoco se puede decir “no, usted acá no entra”» (entrevista, hombre, 38 años, miembro de la comunidad nasa).

«Un compañero que sí quiere volver sin armas, sin violencia, bienvenido, pero bien comportado. Si él se pone de grosero en el Cabildo, con las autoridades, de pronto le hacen un remedio, pero si es de nuestro resguardo, si no es de afuera. Inclusive si las cosas son graves el de afuera también, porque aquí quien manda es la comunidad. Entonces ahí está la ley para todos» (entrevista, mujer, 69 años, integrante de la Guardia Indígena).

«Reconciliación es estar en armonía, pero también estar tranquilo dentro del territorio. Saber que uno respira y que a donde uno va a llegar no va a encontrar esa persona que tiene ese pensamiento de chantajearlo porque en la forma, en el momento que yo lo vea a un ser humano con un arma eso es intimidar. La reconciliación es estar yo libremente» (entrevista, mujer, 63 años, coordinadora general de Salud).

Podría decirse que la reconciliación está en el fundamento de la organización, pues de alguna manera representa los acuerdos que dieron paso al cese de la violencia; sin embargo, los entrevistados también resaltan las dificultades para la reconciliación en la medida en que esta implica concepciones de vida que se oponen a las de la comunidad (espiritualidad). Debido a esto, se manifiesta que las limitaciones para la reconciliación están directamente vinculadas con la presencia constante del conflicto armado, el cual se ha transformado pero no desaparece por completo de la dinámica territorial en el Cauca. Inclusive muchos de los entrevistados no se sienten reconciliados y consideran que la única forma de reconciliación posible es que todos los actores armados, incluyendo al Ejército nacional, salgan de sus territorios:

«No puede haber una reconciliación así de buenas a primeras porque no hay credibilidad en ellos [los actores armados]. Nosotros tenemos toda la voluntad de reconciliarnos, pero poco a poco. (...) Todo tiene su tiempo. No podríamos decir que efectivamente estamos reconciliados, porque vuelven a presentarse otros grupos armados a imponer sus decisiones acá. Yo creo que desde un diálogo respetuoso entre las partes se podría dar la reconciliación, pero para eso hay que esperar» (grupo focal, mujer, 47 años, grupo de mujeres nasa).

En consecuencia, se manifiestan críticas al Acuerdo de Paz entre las FARC-EP y el Gobierno, porque consideran que no fueron tenidos en cuenta a la hora de establecer los aspectos relativos a la negociación. Destaca especialmente una preocupación por el desconocimiento de la realidad de sus territorios como lugares donde realmente se vivieron las consecuencias directas del conflicto entre actores armados. También se resalta la llegada de nuevos y diferentes actores que se establecen en el territorio y generan nuevas formas de violencia y amenaza para la población. Aunado a lo anterior, se expresa la preocupación por la convivencia entre agrupaciones paramilitares que ahora se asientan en el territorio y las fuerzas militares, con quienes no se plantean posibilidades de negociación; de ello se deduce que hay una mayor posibilidad de reconciliación con los desmovilizados de las FARC, probablemente porque a esta organización sí se la reconoce como actor político y porque muchos de sus miembros formaron parte de la comunidad en el pasado. No obstante, también se señala la presencia de disidencias de las guerrillas como un actor que pone en riesgo la tranquilidad de la población.

«El proceso de paz se hizo solamente con algunos líderes de los grupos armados, pero no se tuvo en cuenta el contexto real de la comunidad, ni cómo la comunidad acá en Toribío está pensando fortalecer y seguir sobreviviendo a toda esta parte del conflicto. Es un acuerdo allá, pero acá no se tuvo en cuenta toda la parte indígena, ni la organización que se tiene como movimiento indígena. Acá la comunidad sigue con el mismo temor porque hay muchos guerrilleros que no fueron a las zonas de concentración. Ellos siguen por acá (...) Incluso ya empiezan los panfletos, las amenazas a los líderes y a toda la comunidad, y uno ve que entra y sale mucho carro, mucha gente que no es de acá» (entrevista, mujer, 63 años, coordinadora general de Salud).

«Hay líderes que aún siguen siendo amenazados. (...) Entonces para decir que nosotros como comunidad nos vamos a reconciliar con esos grupos armados y que podemos llegar a un buen vivir, no se refleja, porque uno aún siente la presencia de ellos» (grupo focal, hombre, 39 años, miembro de la comunidad nasa).

Todas estas razones en su conjunto parecen convertirse en obstáculos para la reconciliación; pese a ello, es claro que la comunidad indígena de Toribío, en el marco de una resistencia activa frente al conflicto, ha optado por afianzar las formas de resolución de conflictos que requieren, como mecanismos indispensables para dicha reconciliación, garantías por parte del Gobierno, para posibilitar una verdadera paz territorial.

A manera de conclusión

En los apartados anteriores se ha analizado la manera en que la comunidad indígena nasa de Toribío ha puesto a prueba diversas estrategias para solucionar una de las principales problemáticas que ha afectado su territorio en los últimos 55 años, a saber: la violencia derivada del conflicto armado en Colombia. Dadas sus condiciones geoestratégicas, el norte del departamento del Cauca ha sido una de las zonas más afectadas por el conflicto armado interno. Como se mencionó previamente, en la zona convergen diversos actores armados como los grupos guerrilleros, los paramilitares, las bandas criminales y la fuerza pública, quienes han disputado históricamente el control de este territorio que, a su vez, es habitado por un alto porcentaje de la población indígena del país. En este contexto, las comunidades indígenas del Norte del Cauca se han tenido que enfrentar a situaciones devastadoras.

Ante la incompetencia de los diferentes actores del Estado colombiano para garantizar la paz y la tranquilidad en esta zona del país, la sociedad civil de esta zona vio la necesidad de organizarse y participar activamente en la defensa de sus territorios a través de iniciativas de construcción de paz. En el caso particular del resguardo indígena nasa, la iniciativa de construcción de paz se puede enmarcar en la noción de resistencia activa. Esta noción involucra la puesta en marcha de al menos tres estrategias que han sido exitosas en cuanto al objetivo de construir una paz territorial. Las estrategias son: la creación de la Guardia Indígena, los Sitios de Asamblea Permanente y el Plan de Vida. Estas estrategias han sido exitosas en el sentido de que los miembros de la comunidad indígena nasa han logrado controlar la acción de los actores armados tanto legales como ilegales en su territorio y, de esta manera, han contribuido a configurar nuevos modelos mentales que favorecen la reconciliación y la construcción de paz a nivel local.

Desde la perspectiva del institucionalismo cognitivo, se puede afirmar que los indígenas nasa han logrado transformar la situación de violencia que afectaba su territorio, es decir, las retroalimentaciones negativas del entorno, mediante estrategias pacíficas que han resultado exitosas y permitido la configuración de nuevos modelos mentales favorables a la construcción de paz y la reconciliación, esto es, el restablecimiento de relaciones entre antiguos antagonistas. Ahora bien, la anterior afirmación no pretende señalar que los habitantes de Toribío vivan actualmente en paz o que se hayan reconciliado con sus antiguos victimarios, pues –como se ha evidenciado en este análisis–, ellos argumentan que la única manera de lograr la

La comunidad indígena de Toribío ha optado por afianzar las formas de resolución de conflictos que requieren, como mecanismos indispensables para dicha reconciliación, garantías por parte del Gobierno, para posibilitar una verdadera paz territorial.

paz y la reconciliación es que todos los actores armados se aparten de su territorio. De esta manera, se observa que en su cosmovisión la reconciliación y la paz son dos conceptos que están estrechamente relacionados con la idea de tranquilidad, autonomía y, especialmente, respeto hacia su cultura, sus valores y su territorio ancestral.

Referencias bibliográficas

- Archila, Mauricio y González, Catherine. *Movimiento indígena caucano: historia y política*. Tunja: Universidad Santo Tomás, 2010.
- Asociación de Cabildos Indígenas de Toribío, Tacueyó y San Francisco. «Plan de vida Proyecto nasa CXACXA WALA». Çxhab Wala Kiwe, Territorio del Gran Pueblo (julio de 2010) (en línea) [Fecha de consulta: 27.02.2018] <https://nasaacin.org/plan-de-vida-proyecto-nasa/>
- Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca. «La Guardia Indígena conmemoró 17 años de lucha, resistencia y control territorial – Huellas Caloto Cauca». *nasaacin.org*, (mayo de 2018) (en línea) [Fecha de consulta: 25.11.2018] <https://nasaacin.org/la-guardia-indigena-conmemoro-17-anos-de-lucha-resistencia-y-control-territorial-huellas-caloto-cauca/>
- Casas-Casas, Andrés y Guzmán, Juanita. «The eternal yesterday? The Colombian reintegration process as social dilemma». *Papel Político*, vol. 15, n.º 1 (2010), p. 47-85.
- Chapman, Audrey. «Approaches to Studying Reconciliation». En: van der Merwe, Hugo; Baxter, Victoria y Chapman, Audrey (eds.). *Assessing the Impact of Transitional Justice: Challenges for Empirical Research*. Washington: United States Institute of Peace Press, 2009, p. 143-172.
- CNMH-Centro Nacional de Memoria Histórica. *Nuestra vida ha sido Nuestra Lucha, Resistencia y memoria en el cauca indígena*. Bogotá: CNMH, 2012.
- CRIC-Consejo Regional Indígena del Cauca. *Lucha por la tierra y persecución al Movimiento Indígena, Impunidad y Crímenes de Estado en el Departamento del Cauca*. Bogotá: CRIC, 2007.
- Firchow, Pamina. «Do reparations repair relationships? Setting the stage for reconciliation in Colombia». *International Journal of Transitional Justice*, vol. 11, n.º 1 (2017), p. 1-24
- Gamba, Alexander. «Las acciones colectivas frente a la guerra. El caso del movimiento indígena del Cauca, Colombia». En: Makaran, Gaya (coord.). ¿Estadonación o Estado plural? *Pueblos indígenas y el Estado en América Latina*. Ciudad de México: CIALC, 2017, p. 89-106.
- Gibson, James. «Taking Stock of Truth and Reconciliation in South Africa: Assessing Citizen Attitudes through Surveys». En: van der Merwe, Hugo; Baxter,

- Victoria y Chapman, Audrey (eds.). *Assessing the Impact of Transitional Justice: Challenges for Empirical Research*. Washington: United States Institute of Peace Press, 2009, p. 173-190.
- Guzmán, Álvaro y Rodríguez, Alba Nubia. *Orden social y conflicto armado. El norte del Cauca 1990 – 2010*. Cali: Universidad del Valle, 2015.
- Hernández, Esperanza. «La resistencia civil de los indígenas del Cauca». *Papel Político*. vol. 11, n.º 1 (2006), p. 177-220.
- Hernández, Jorge. «Formas de acción colectiva contra la guerra en el movimiento indígena del suroccidente colombiano». *Revista Sociedad y Economía*, n.º 5 (2003) p. 109-124.
- Hernández, Jorge. «Acción colectiva y región: En el norte del Cauca y el sur del Valle (2006-2007)». En: Castillo, Carlos; Guzmán, Álvaro; Hernández, Jorge; Luna, Mario y Urrea, Fernando (comps.). *Etnicidad, acción colectiva y resistencia: En el norte del Cauca y el sur del Valle a comienzos del siglo XXI*. Cali: Editorial Universidad del Valle, 2010, p. 193-302.
- Levalle, Sebastián. «Resistencia a la violencia política y defensa de la territorialidad comunitaria en el departamento del Cauca, Colombia (1971-2012)». *Economía y Sociedad*, n.º 34 (2018).
- Luna, Mario. «La región del norte del Cauca y sur del Valle examinada según los rasgos del conflicto armado». En: Castillo, Carlos; Guzmán, Álvaro; Hernández, Jorge; Luna, Mario y Urrea, Fernando (comps.). *Etnicidad, acción colectiva y resistencia: En el norte del Cauca y el sur del Valle a comienzos del siglo XXI*. Cali: Editorial Universidad del Valle, 2010, p. 303-367.
- Mantzavinos, Chrysostomos; North, Douglass y Shariq, Syed. «Learning, Institutions, and Economic Performance». *Perspectives on Politics*, vol. 2, n.º 1 (2004), p. 75-84.
- Meierhenrich, Jens. «Varieties of Reconciliation». *Law and Social Inquiry*, vol. 33, n.º 1 (2008), p. 195-231.
- Méndez, Nathalie. «Institucionalismo cognitivo, capital social y la construcción de las paz en Colombia». *Economía & Región*, vol. 9, n.º 1 (2015), p. 67-90.
- Rettberg, Angelika. «Diseñar el futuro: una revisión de los dilemas de la construcción de paz para el posconflicto». En: Cárdenas, Miguel (coord.). *La construcción del posconflicto en Colombia. Enfoques desde la pluralidad*. Bogotá: Friederich-Ebert-Stiftung en Colombia y Fondo Editorial CEREC, 2003, p. 83-111.
- Rettberg, Angelika y Ugarriza, Juan. «Reconciliation: A comprehensive framework for empirical analysis». *Security Dialogue*, vol. 47, n.º 6 (2016), p. 517-540.
- Tobar, Javier. «Resistencia indígena y conflicto armado en el municipio de Toribío, Cauca, Colombia». *Trama y fondo: revista de cultura*, n.º 43 (2017), p. 169-180.
- Villa, William y Houghton, Juan. *Violencia política contra los pueblos indígenas en Colombia 1974-2001*. Bogotá: CECOIN - OIA, 2005.

Anexo 1. Ficha técnica del estudio

Técnicas utilizadas:	Entrevista y grupo focal
Población:	Comuneros, líderes y autoridades de la comunidad nasa de Toribio (Cauca, Colombia)
Tamaño muestral:	30 personas distribuidas en seis grupos focales y 11 personas que participaron en las entrevistas semiestructuradas de manera individual
Método de muestreo:	Muestra de conveniencia (no aleatoria) respetando criterios de sexo, edad y rol dentro de la comunidad
Fechas del trabajo de campo:	Del 11 al 20 de junio de 2017
Consideraciones éticas:	Las entrevistas y grupos focales se realizaron en forma anónima y con previo consentimiento de los informantes, quienes aceptaron voluntariamente participar en el estudio y brindar información para fines estrictamente académicos